

# El sector privado debe acudir en auxilio del público

**MANUEL MIÑÉS MUÑOZ**

DIRECTOR-GERENTE DE LA CÁMARA DE CONTRATISTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

**E**studios de toda solvencia auspiciados por SEOPAN (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras) y realizados por las consultoras AT. Kearney, Seener, Deloitte y Uria Menéndez, señalan que para recuperar el nivel de inversión pública para resolver el importante déficit en infraestructuras prioritarias y de elevado impacto social, en España necesitamos unos 114.000 millones de euros. Desglosado así: para el ciclo integral del agua, 12.000 millones; medio ambiente, 6.500 millones; infraestructuras de salud y educación, 10.500 millones; movilidad, accesibilidad urbana y transporte metropolitano, 84.500 millones; e infraestructuras logísticas, 699 millones, con sus correspondientes dotaciones para la conservación de este patrimonio público.

Déficit inversor que, territorializado a la Comunidad Valenciana –tras trabajo exhaustivo y conjunto entre la CEV y la Cámara de Contratistas–, alcanza los 21.800 millones de euros, destacando por su magnitud las infraestructuras del transporte (viarias, ferroviarias y logísticas) con 12.400 millones; infraestructuras del ciclo del agua (abastecimientos, tratamiento de aguas, regulación de avenidas y regadíos eficientes) con 1.530 millones; equipamientos sociales (educación, justicia, salud y residencias para dependientes), 1.500 millones; y gestión medioambiental (plantas de tratamiento mecánico biológico TMB y de Valorización Energética VE) que valoradas en unos 660 millones de euros evitarían transportar 1.000 toneladas diarias de basura (50 camiones diarios) a lo largo y ancho de la Comunitat.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2018, ya aprobados, con sus 7.636 millones de euros de inversiones reales consolidadas, son insuficientes, aun suponiendo un incremento del 14'8% sobre 2017. Retrocedemos en inversiones a niveles de 1999.

Las inversiones asignadas a la Comunidad

Valenciana representan 730'36 millones. Y ya aseguramos que un año más se incumplirán, bien por carencia de proyectos redactados y supervisados, bien porque una vez transcurrido el primer cuatrimestre del 2018 su aplicabilidad real, hasta final año, es harto limitada. A nivel autonómico recibiremos, por tanto, 149 euros por habitante, que supone 68 menos que el español medio.

El déficit inversor en la Comunitat, entre 2000 y 2018, ya alcanzará los 7.873 millones. Tanto ante los gobiernos del PP como ante los del PSOE seguimos siendo ignorados. Somos la cola del ratón, presidente Sánchez.

La inversión en España será en 2018 y 2019 un 63% menor que la media europea. Nuestra inversión por habitante en infraestructuras de la salud es un 30% menor que la media de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia (46 euros por habitante frente a 66 euros), en infraestructuras educativas 71% menos (27 frente a 93); en obras medioambien-

tales –ante una Europa húmeda– un 62% menor; y en transporte, un 54% inferior.

Con el ritmo actual de inversión (extrapolando las cifras nacionales) calculamos desde la Cámara de Contratistas que tardaríamos unos cien años en superar nuestra actual brecha. A no ser que acudamos ya a la colaboración público-privada en sus múltiples modalidades concesionales, que no compute en los Presupuestos, ni merme las partidas de gasto social.

Los 451.121 millones de euros de gasto de los Presupuestos Generales del Estado 2018 destinan el 61% a gasto social (pensionistas, 144.834 millones; 17.702 millones a prestaciones de desempleo; 31.537 a intereses de la deuda, etc.), que sumado al 'intocable' capítulo I de gastos de personal y el capítulo IV (transferencias), sólo dejan el 1'7% (7.636 millones de euros) a inversiones reales, de los cuales el Ministerio de Fomento dispone de 1.934 millones.

Los 19.956 millones de euros de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2018 destinan 17.462 millones de euros (87'50%) para sanidad, educación, bienestar social y dependencia. El servicio de la deuda ya nos supone el 25'84%. Para infraestructuras, movilidad, logística y vivienda quedan 388 millones (el 1'94%). Y encima, los pactos del Botànic y La Nau han priorizado reabrir la televisión À punt. ¡Qué destarifo!

Y mientras tanto, nuestra tasa de paro (367.103 desempleados) es el 15'20% de la población activa frente al 14'10% nacional. ¡Recordemos que un millón de euros en infraestructuras genera catorce

puestos de trabajo, su retorno fiscal supera el 50%, y además mejora la actividad económica.

Este regreso utópico y partidista, que afirma que cualquier servicio externalizado y concesional eficiente (aun en contra del Tribunal de Cuentas) debe revertir a la gestión directa, por ejemplo, el Área de Salud de Alzira y otras solicitudes demandadas, como la reversión de AP-7, manifestada por el Ministro de Fomen-

to, José Luis Ábalos, va en contra de la dinámica europea y, de países mundialmente avanzados en políticas sociales.

Finalizo con una intervención de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) quien considera imprescindible desarrollar el pago por uso de las infraestructuras, contribuyendo a su financiación, abogando igualmente por atraer a los fondos de inversión. Su presidente apunta que es imposible que con la inversión presupuestaria –que está en mínimos desde los últimos veinte años– recupere los niveles previos a la crisis.

Esta circunstancia, unida al alto nivel de deuda pública y déficit –que limita el gasto, tanto del Estado como, a más, de la Generalitat– obliga a que las Administraciones públicas acudan al sector privado para afrontar proyectos de infraestructuras de uso público que generen mayor actividad económica con su efecto multiplicador. ¡Que paguen los usuarios y no todos los contribuyentes!



:: YESHI KANGRANG